



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA PRIMERA CIVIL

Medellín, ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
RADICADO: 05001 31 03 009 2022 00008 02
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS

Asunto: Solicitud Corrección de Sentencia.
Demandantes: MARÍA CECILIA GONZÁLEZ MIRANDA y otro.
Demandados: MAURICIO VALLEJO MORENO y otros.
Extracto: 1. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la profirió, sin que las instituciones de la Aclaración, Corrección y Adición, constituya oportunidad para replantear el litigio.
2. Al evidenciarse un error puramente aritmético ora de omisión, cambio o alteración de palabras, la sentencia puede ser corregida, pero si ello no se advierte, deberá negarse la corrección.

ASUNTO A TRATAR

Decide la Sala la solicitud de corrección que formula la codemandada y llamada en garantía SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., frente a la sentencia proferida por esta Sala de Decisión el día quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023), previos:

ANTECEDENTES

Solicita la accionada que se corrija la mencionada sentencia, en el sentido de establecer que la suma asegurada debe reconocerse por el valor de salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ocurrencia del siniestro (año 2017) y no de cuando se profirió tal providencia (año 2023), por cuanto así se pactó en la cláusula 12 de las condiciones generales de la póliza 1010495443317.

También apoya tal petición en el artículo 1079 del C. de Co..

En tales términos, ha de resolverse lo deprecado, previas:

CONSIDERACIONES

Las sentencias pueden ser aclaradas, corregidas y adicionadas en la forma establecida en el ordenamiento procesal civil, sin que ello constituya un instrumento para replantear el litigio, o en su defecto, para generar una nueva ocasión de análisis y explicación de conceptos ya definidos, pues como de tiempo atrás ha indicado el supuesto normativo pertinente; *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”*¹, de lo que la doctrina indicó:

“Las sentencias judiciales una vez proferidas por el juez agotan la competencia funcional, razón ésta por la cual no pueden ser objeto de nuevo pronunciamiento por el mismo juzgador que las profirió, salvo el caso de que sea procedente la corrección de errores aritméticos o de algunas expresiones, o en la hipótesis de ser necesaria su adición o aclaración. Será procedente la adición del fallo cuando quiera que quien lo profirió no hubiere decidido sobre todos los extremos de la litis, o lo que es lo mismo, hubiere incurrido en una omisión por abstenerse de decidir sobre alguno de los aspectos que deberían haberse incluido en la decisión.” (Corte Constitucional, auto A093 de 2006).

Lo anterior por cuanto se parte del principio de inmutabilidad de las sentencias².

¹ Sobre ello el artículo 285 C. G. del P., reza: *“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella...”*.

² Corte Constitucional, auto A303 de 2015

La corrección prevista en el artículo 286 del ordenamiento procesal, se prevé cuando se haya incurrido en error puramente aritmético, ora, ante pifia derivada de omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la providencia o influyan en ella, donde de lo presentado, ni lo uno ni lo otro, en la medida que lo que se evidencia es la intención de abrir debate por una inconformidad con lo decidido.

Conforme lo previsto en el artículo 16 Ley 446 de 1998 visto en armonía con el inciso final del artículo 283 del C. G. del P., no se advierte en la sentencia aludida errores aritméticos, ni tampoco de omisión, alteración o cambio de palabras, pues el concepto “vigente” ha de entenderse tal como se aplicó, máxime cuanto el artículo 28 del C.C. prevé que “*Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio...*”, regla que aunque es de hermenéutica legal, aplica a las presentes vía analogía según se desprende del artículo 12 del Estatuto Procesal Civil.

El vocablo “vigente”, lo define la RAE como, “... *Que está en vigor y observancia.*”, sin que pueda atenderse los argumentos de quien motiva este pronunciamiento, máxime cuando el inciso 2º del artículo 283 del mismo ordenamiento procesal contempla “*El juez de segunda instancia deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado.*”; sobre todo, en una situación, como la que nos ocupa, en la que ambas partes apelaron, lo cual implicaba que “... *cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.*”, tal como se desprende del artículo 328 inciso 2º ibidem.

Concluyendo, la solicitud de corrección no está llamada a prosperar, pues esta no es una oportunidad para replantear el litigio, ni pretender

que se reabra el debate para obtener un pronunciamiento diferente al definido, el cual se ajustó al ordenamiento jurídico.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

ÚNICO: NEGAR la solicitud de corrección impetrada por la codemandada y llamada en garantía SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., respecto a la sentencia de segunda instancia proferida el quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023), tal como se motivó.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO

(En permiso)

SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
MAGISTRADO



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
MAGISTRADO